
0551-D-02

Buenos Aires, 15 de marzo de 2002.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Eduardo O. Camaño.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle la reproducción, en el período parlamentario 2002 del proyecto de ley de mi autoría, expediente 639-D.-00, publicado en el Trámite Parlamentario N° 8 del año 2000.

Sin más, y a la espera de resolución favorable, hago propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

María Lelia Chaya.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 1.276 del Código Civil conforme a la siguiente redacción: “Si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y disposición es conjunta del marido y la mujer. El juez podrá dirimir los casos de conflicto”.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las normas del Código Civil que rigen la sociedad conyugal, merecen ser analizadas a la luz de concepciones contemporáneas, particularmente desde que la ley 23.179 ratificó en 1985 la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y la reforma de 1994 en su artículo 75 inciso 22 consideró a esa convención complementaria de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de una oportuna revisión integral de las normas sobre sociedad conyugal, consideró que el caso del artículo 1.276 del Código civil constituye un vestigio anacrónico que no coincide con el tiempo de antiguas usanzas. En efecto, el artículo 1.276 en su redacción originaria y conforme a los conceptos vigentes en el derecho decimonónico, establecía como principio general que el marido era el administrador legítimo de todos los bienes del matrimonio.

En 1968, tras casi un siglo de vigencia del Código Civil redactado por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, las reformas sancionadas por la ley 17.711 morigeraron tal principio, disponiendo en el artículo 1.276 que cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo y en el artículo 1.277 se estableció el necesario consentimiento de ambos cónyuges para determinados actos referidos a bienes inmuebles o muebles registrables.

Ello no obstante, el segundo párrafo del artículo 1.276 (según ley 17.711) establece: “Si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y disposición corresponde al marido, salvo también lo dispuesto en el artículo siguiente”.

Indudablemente esa redacción se encuentra teñida por costumbres y preconceptos del pasado, que la evolución social ha ido desechando. No caben dudas de que en la actualidad no puede presumirse que corresponde al marido la administración o disposición frente a un caso de duda, sino que debe reconocerse conjuntamente a ambos cónyuges, previendo la intervención judicial para casos de conflicto.

Estos breves fundamentos constituyen suficiente exposición para proponer la reforma del mencionado artículo 1.276 del Código Civil.

–A la Comisión de Legislación General.